



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., catorce de abril de dos mil veintitrés.

PROCESO	Verbal (Pertenencia)
DEMANDANTE	Lucía del Socorro Montoya Quintero
DEMANDADO	Martha Cecilia Montoya Quintero y otra.
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado
CUDR	05266-31-03-001–2016-00544-02.
RADICADO INTERNO	006-23.
PROVIDENCIA	075-23.
DECISIÓN	De acuerdo con el artículo 173 del C. General del Proceso, las pruebas deben solicitarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede la Sala a resolver la apelación formulada por el apoderado de las demandadas, en contra del auto del cuatro de septiembre de 2022, en lo atinente a la negativa de la incorporación como prueba de los documentos y audios que corresponden a las pruebas practicadas dentro del proceso de restitución de bien inmueble que se adelanta ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Envigado bajo el radicado 2019-01367.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, la señora Lucía del Socorro Montoya Quintero presentó demanda verbal de pertenencia en contra de Martha Cecilia y Rosa Julia Montoya Quintero, la cual fue admitida por auto del 25 de enero de 2017.

Una vez notificadas las demandadas y habiéndose designado curador *ad*

litem para que representa a las personas que crean tener derechos sobre el inmueble que se pretende adquirir por prescripción, el apoderado de las demandadas presentó escrito solicitando incorporar como prueba los documentos y audios allegados mediante memorial del cuatro de mayo de 2022, las cuales habían sido practicadas en el proceso de restitución de inmueble arrendado que cursa en el Juzgado Primero Civil Municipal de Envigado, bajo el radicado 2019-01367, teniendo en cuenta que se trata de procesos ligados y que mediante tutela se había ordenado la suspensión del proceso de restitución, hasta tanto se dicte sentencia dentro del presente proceso. (33. (1) MEMORIAL SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE PRUEBAS –CECILIA MONTOYA QUINTERO RAD 2016-544)

2.- El auto apelado. Mediante proveído del cinco de septiembre de 2022, el juzgado de primera instancia negó la incorporación de dicha prueba, con fundamento en que los medios probatorios deben aportarse con el escrito demanda y contestación de la misma (o en caso de reforma, en ella), de manera que no se sorprenda a la parte contraria con pruebas que no conoció. Sostuvo que, las pruebas solicitadas resultan extemporáneas, ya que no es el momento procesal oportuno para dicho aporte.

3.- La apelación. Oportunamente el apoderado de las demandadas interpuso recurso de apelación, argumentando que su petición va encaminada al traslado de las pruebas que fueron practicadas en el proceso de restitución aludido, las cuales fueron practicadas con audiencia de las mismas partes involucradas en el presente proceso de pertenencia, de lo que se desprende que la contraparte las conoce y tuvo lugar de controvertirlas.

Arguyó que la validez de la valoración de una prueba traslada depende del ejercicio del derecho de contradicción que se surta sobre la misma, ya sea en el proceso de origen o en el que se traslada, pues solo cuando tal derecho esté plenamente garantizado, el juez se encuentra autorizado para considerar la prueba de que se trate sin ningún trámite adicional, que es lo que sucede en el presente asunto.

Adujo que los documentos y audios de los que se pretende su incorporación y posterior valoración probatoria, cumplen con los requisitos generales de toda prueba, toda vez que son pertinentes, conducentes y útiles, amén de que fueron

obtenidas con garantía del derecho de contradicción; además, son pruebas que se obtuvieron con posterioridad a la presentación de la demanda y la contestación.

Sostuvo que, en todo caso, el juez está revestido de facultades oficiosas para decretar pruebas cuando las mismas son necesarias para llegar a la verdad y a la justicia material y en lo atinente a las circunstancias y motivos de lo pretendido en el proceso de pertenencia.

Con fundamento en ello, petitionó la revocatoria del auto, en cuanto a la negativa de tener como prueba trasladada los documentos y audios allegados, para que en su lugar de ordene que dichos documentos sean incorporados al proceso y apreciados sin más formalidades, tal y como lo estipula el artículo 174 del C. General del Proceso.

CONSIDERACIONES

1.-Prueba judicial. La prueba judicial es el acto procesal que tiene como finalidad arribar al operador jurídico al convencimiento de los hechos objeto de controversia. Corresponde a los contendientes acreditar los hechos o excepciones que aduzcan, según el papel que desenvuelvan, en aras de lograr la prosperidad de sus súplicas.

Nuestra normativa procesal civil establece ciertas exigencias que deben satisfacerse al momento de solicitar y practicar el medio probatorio, a efectos de que el funcionario pueda no solo decretarla sino también apreciarla al tiempo de su valoración.

Tales exigencias son clasificadas por el doctrinante Azula Camacho¹ en: “Requisitos *Subjetivos*”, que se refieren a los sujetos y tienen en cuenta fundamentalmente dos aspectos “*LA COMPETENCIA Y LA LEGITIMACIÓN*”, la primera atañe al funcionario y la segunda a las partes; “*REQUISITOS OBJETIVOS*” se refieren a la materia u objeto del proceso y están constituidos por “*la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal*” y “*REQUISITOS DE ACTIVIDAD*”, que se refiere a las circunstancias de “*lugar, tiempo y modo*”.

En lo que respecta a los requisitos objetivos, tenemos que:

¹ En su obra “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO”. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1998. Pág. 51 y ss.

“A) Conducencia. Hace referencia a que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho... Así, por ejemplo, la compraventa de inmuebles es un acto solemne que debe constar por escritura pública, por lo cual la prueba conducente para demostrarlo es esta clase de documento.

B) Pertinencia. Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis... consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que configuran controversia.

C) Utilidad. La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de la controversia que aún no se encuentre demostrado.

D) Ausencia de prohibición legal. La prueba puede ser conducente pertinente y útil y, sin embargo, no es dable decretarla y practicarla por prohibirla la ley...”

Y en lo que se refiere a los últimos requisitos, es decir, los de actividad, tenemos lo siguiente:

- *Lugar.* Hace referencia al sitio donde deben cumplirse las etapas que integran la actividad probatoria, teniéndose como regla general, el Despacho Judicial que conoce del proceso.
- *Tiempo.* Alude a la oportunidad en la deben surtirse dichas etapas

Respecto de la oportunidad para solicitar las pruebas, contempla nuestra reglamentación procedimental, que los intervinientes en un trámite judicial, deberán hacerlo al momento de formular la demanda o incidente, al presentar las contestaciones a éstos, o formular excepciones, de ser el caso, como pauta general, y en las mismas oportunidades aportar las que tengan en su poder y pretendan hacerlas valer.

- *Modo.* Hace referencia a la forma como se exteriorizan las diferentes etapas de la actividad probatoria, es decir, si se hace a través de la escritura o la oralidad.

Es en el auto de apertura del período probatorio donde el operador debe examinar si las pruebas solicitadas por las partes en los actos procesales previos, resultan idóneas para acreditar los supuestos objeto de controversia, debiendo

rechazar *in limine* las que no, como expresamente refiere el canon 168 del Código General del Proceso: “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”

Nótese que, tratándose de pruebas impertinentes o superfluas, esto es, aquellas que tienden a demostrar hechos que no guardan relación con el tema de controversia, o que aun teniéndola ya se encuentren acreditados, su impertinencia o inutilidad debe ser “*notoria o manifiesta*”, es decir, palpable u ostensible, pues de lo contrario lo procedente es que el juez disponga su práctica dada la posibilidad de que contribuyan al esclarecimiento de las circunstancias debatidas.

2.- Caso concreto. En el *sub lite*, la *a quo* desestimó la solicitud de la parte demandada, con miras a que se incorporara como prueba los documentos y audios que fueron practicados en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado que cursa en el Juzgado Primero Civil Municipal de Envigado, bajo el radicado 2019-01367, por considerar que había sido presentada en forma extemporánea, pues no lo hizo al momento de dar contestación a la demanda.

Así, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la prueba allegada por la parte demandada, la cual considera tiene el carácter de trasladada conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del C. General del Proceso, es extemporánea o no. Es decir, sobra para el caso concreto un análisis atinente al sometimiento de la contradicción del mencionado medio probatorio, o si este cumple con los requisitos generales de toda prueba, como lo es la pertinencia, conducencia y utilidad, como lo pretendió resaltar el recurrente en su escrito.

En efecto, nuestro estatuto procesal civil, regula de manera precisa las oportunidades para solicitar y aportar pruebas que se detenten y se busquen hacer valer, esto es, al momento de formular demanda o incidente, al presentar las contestaciones a éstos o en el traslado al actor de las defensas presentadas por su contraparte, de ser el caso; por tanto, solo dentro de ellas es posible hacerlo; ello con fundamento y acogimiento del debido proceso en el campo probatorio y, obviamente el respeto de los términos judiciales, los cuales son de estricto cumplimiento.

Como puede evidenciarse dentro del expediente, las demandadas realizaron pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de la demanda, siendo ese el momento para allegar y solicitar las pruebas que pretendían hacer valer. Esto es, la parte demandada dejó pasar la etapa procesal correspondiente para solicitar y allegar pruebas, por lo que puede afirmarse que ahora su pretensión va encaminada a revivirla, lo cual es a todas luces improcedente.

Ahora, si bien el apoderado de las demandadas señala que las pruebas que pretende hacer valer se obtuvieron con posterioridad a la contestación de la demanda, además, que el juez está revestido de facultades oficiosas para decretarla con el fin de obtener la verdad real y material en el proceso de pertenencia, corresponderá a la funcionaria de primer grado que analice tal circunstancia en la debida oportunidad, en los términos del artículo 170 del C. General del Proceso. Además, si bien los documentos se pudieron obtener después del término de contestación, olvidan las censoras que estaban habilitadas para pedir la práctica de la prueba desde antes, es decir, en la contestación podían haber anunciado la necesidad de las pruebas practicadas o que se practicaran en el Juzgado Municipal, pero no lo hicieron, lo que torna inviable su aportación posterior, no anunciada.

Como corolario, de acuerdo con el artículo 173 ibídem, las pruebas deben solicitarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello, en consecuencia, como la prueba ahora anunciada por las demandadas no se aportó dentro del término señalado por nuestra legislación procesal, no procedía su incorporación, como bien se definió en el auto impugnado. Es que, se repite, los términos para presentar y controvertir las pruebas se encuentran debidamente señalados en las oportunidades probatorias de conformidad a lo expresado en la aludida normativa.

Bajo estos parámetros, conforme lo esbozado con antelación, se confirmará la decisión apelada, sin costas porque no se causaron.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** la decisión contenida en el auto del cinco de septiembre de 2022, proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, dentro de la demanda Verbal de pertenencia

instaurada por Lucía del Socorro Montoya Quintero en contra de Martha Cecilia y Rosa Julia Montoya Quintero, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized, cursive script.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022